



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	GUILLERMO LEÓN VALENCIA ARENAS
DEMANDADA	COLPENSIONES
ORIGEN	Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	050013105-2019-00212-01
TEMAS	Incrementos pensionales por personas a cargo
CONOCIMIENTO	Consulta
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia.

En la fecha y hora señaladas, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 15 del Decreto 806 de 2020 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por GUILLERMO LEON VALENCIA ARENAS contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda¹

El señor Guillermo León Valencia Arenas, formula demanda contra Colpensiones, pretendiendo se condene **i)** al reconocimiento y pago de incrementos pensionales por su cónyuge e hijo menor a cargo desde el 20 de enero de 2010, indexados; y **ii)** costas del proceso.

Fundamentó sus pretensiones en que mediante Resolución N° 016049 del 26 de agosto de 2010, le fue reconocida pensión de invalidez. El 11 de abril de 1981 contrajo matrimonio con Olga Lucía Granados Cartagena, con quien procreó tres hijos, de los cuales Santiago León Valencia Granados es menor de edad y estudia séptimo grado en la Institución Educativa Samuel Barrientos Restrepo. Su cónyuge e hijo menor de edad, con quienes convive, dependen económicamente de él, no laboran, ni reciben pensión, siendo el demandante quien les provee alimento, vivienda vestido, recreación y educación. El 1 de diciembre de 2016, reclamó administrativamente lo pretendido en la demanda.

¹ Fls. 4/5.

Oposición a las pretensiones de la demanda²

Colpensiones consideró que no hay lugar al pago de incrementos pensionales porque la pensión del demandante fue reconocida en el año 2010, cuando la norma que los consagraba ya había sido derogada, según lo sostenido por la H. Corte Constitucional en la sentencia SU 140 de 2019 de la H. Corte Constitucional. Excepcionó inexistencia de la obligación de pagar incrementos por personas a cargo, improcedencia de la indexación, compensación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y descuentos del retroactivo por salud.

Intervención de la Procuradora Judicial en lo Laboral³

Mediante oficio N°130 PJMP la dirigido al despacho, la Procuradora Judicial dentro del término oportuno intervino excepcionando prescripción.

Sentencia de primera instancia⁴

El 09 de octubre de 2019, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia, declarando la prosperidad de la excepción de inexistencia de la obligación de pagar incrementos por personas a cargo y absolviendo a Colpensiones de las pretensiones incoadas en su contra. Condenó en costas a la parte demandante a favor de Colpensiones en la suma \$828.116.

Fundamentó su decisión en que la ley 860 de 2003, en vigencia de la cual el demandante obtuvo la pensión de invalidez, no consagró incrementos pensionales por personas a cargo; adicionalmente, según lo expresado en la sentencia SU -140 de 2019, la norma que reguló los incrementos pensionales, fue derogada con el inicio de la vigencia de la ley 100 de 1993.

El proceso fue remitido en **consulta**.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Una vez corrido el traslado para alegar en esta instancia, ambas partes lo descorrieron oportunamente.

De un lado, la apoderada de la parte demandante solicitó la revocatoria de la providencia, por considerar que al ser su cliente beneficiario del régimen de transición consagrado en el art.36 de la Ley 100 de 1993, debe entenderse que la norma que consagró los incrementos pensionales por personas a cargo está vigente para él, quien además acreditó testimonialmente el cumplimiento de los requisitos para acceder a dichos incrementos pensionales, no siendo razonable dar aplicación a la sentencia SU 140 de 2019, si no la postura previamente sostenida por la H. Corte Constitucional en las sentencias T- 217 de 2013, T- 831 de 2014, T- 319 de 2015, T- 395 de 2016 y T-460 de 2016. Adicionalmente, el art.289 de la Ley 100 de 1993, no derogó los arts.21 y 22 del Decreto 748 de 1990.

² Fls 27/31.

³ Fls 25/26.

⁴ Fls 40/41.

De otro lado, la apoderada de la demandada solicitó la confirmación de la sentencia conocida en consulta, acogiendo los argumentos de la misma, en cuanto lo expuesto en la sentencia SU 140 de 2019 y en atención a que la pensión de invalidez del demandante se concedió dando aplicación a la Ley 860 de 2003.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala se surte en grado jurisdiccional de Consulta en favor de la parte actora, conforme al artículo 69 del CPTSS.

Vistos los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por la parte demandada, entiende la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar **a)** si hay o no lugar al pago de incrementos pensionales por personas a cargo; en caso de ser así, se determinarán **b)** los extremos temporales de su causación y si hay o no lugar a su indexación.

Hechos relevantes acreditados documentalmente

- Guillermo León Valencia Arenas y Olga Lucía Granados Cartagena, contrajeron matrimonio por el rito católico el 11 de abril de 1981⁵.
- Mediante Resolución 016049 del 26 de agosto de 2010, el extinto ISS ordenó el reconocimiento de pensión de invalidez de origen común al demandante, a partir del 1 de octubre del mismo año. Para ello dio aplicación, entre otras normas, al art.1 de la Ley 860 de 2003 que modificó el art. 39 de la ley 100 de 1993⁶.
- Santiago León Valencia Granados nació el 07 de julio de 2004. Es hijo del Guillermo León Valencia Arenas y Olga Lucía Granados Cartagena⁷ y para el 09 de marzo de 2019 estudiaba en la Institución Educativa Samuel Barrientos Restrepo⁸.

Declaraciones extrajuicio

Myriam del Socorro Naranjo de Cano y Sandra María González declararon ante el Notario Trece del Círculo Notarial de Medellín que conocen al demandante y su cónyuge, refiriendo que conviven en unión marital de hecho; también conviven con su hijo Santiago León y sus ingresos derivan de la pensión que percibe el señor Valencia Arenas⁹.

⁵ Fl.15

⁶ Fls 13/14.

⁷ Fl 16.

⁸ Fl 17.

⁹ Fls.19/20.

a) Incrementos pensionales por personas a cargo

Dispuso el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que las pensiones de vejez e invalidez se incrementarán “a) *En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) años si son estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre que dependan económicamente del beneficiario y, b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de una pensión*”.

Por su parte, el artículo 22 de la misma norma, estableció en lo que interesa, que “*los incrementos de que trata el artículo anterior no forman parte integrante de la pensión de invalidez o de vejez que reconoce el Instituto de Seguros Sociales y el derecho a ellos subsiste mientras perduren las causas que les dieron origen*”.

Fue postura de esta Sala el considerar que en materia de riesgos de invalidez, vejez y muerte de origen común, la Ley 100 de 1993 no derogó en su totalidad la legislación anterior que regulaba la materia, y dejó vigentes múltiples disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, tales como los artículos 21 y 22, los cuales contemplan los incrementos pensionales y su naturaleza; hemos venido sosteniendo igualmente que este beneficio queda circunscrito a un contingente determinado de beneficiarios, los pensionados bajo el régimen de prima media administrado por el ISS contenido en el Decreto 758 de 1990, o a quien se aplicare ese régimen por encontrarse en transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Ello a la vez, se infiere de reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en sentencia del 5 de diciembre de 2007, radicado 29.751 con ponencia del Dr. Luis Javier Osorio López, quien a su vez se remite a la sentencia del 27 de julio de 2005 radicado 21.517 donde por mayoría definió que los incrementos por personas a cargo previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049 continúan vigentes para quienes se les aplica el mencionado Acuerdo.

Pese a lo anterior, la H. Corte Constitucional profirió sentencia **SU-140 de 2019**, mediante la cual determinó: “*salvo que se trate de derechos adquiridos antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el derecho a los incrementos pensionales que previó el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 desapareció del ordenamiento jurídico por virtud de su derogatoria orgánica; todo ello, sin perjuicio de que de todos modos tales incrementos resultarían incompatibles con el artículo 48 de la Carta Política luego de que éste fuera reformado por el Acto legislativo 01 de 2015*”.

Precisó la Corporación en dicha providencia

“6.6. No sobra señalar que dicho derecho de incremento pensional al 14% para quienes cumplieron con los requisitos para acceder al derecho de pensión antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se encuentra reservado para quienes, en el momento

de cumplir con tales requisitos, tuvieren cónyuge o compañera o compañero a cargo y mientras continúen teniéndolo”.

Como consecuencia de lo anterior, la postura de esta Sala de Decisión Laboral con relación a la vigencia de los incrementos pensionales, varió, para en su lugar adoptar la sostenida por el órgano de cierre constitucional.

En el caso, la pensión que se pretende incrementar no es de vejez obtenida en aplicación del régimen de transición como pretende hacerlo ver la apoderada de la parte demandante al descorrer el traslado para alegar en esta instancia, si no una pensión de invalidez reconocida en vigencia en de la Ley 860 de 2003, que modificó la Ley 100 de 1993, en materia de reconocimiento de la referida prestación, por tanto no es viable acceder a las pretensiones de la demanda.

Y, si aún en gracia de discusión se aceptare que por no haber derogado el art. 289 de la Ley 100 de 1993 expresamente los arts.21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, bastaría indicar que el demandante no adquirió su derecho pensional con antelación al 1 de abril de 1994, para concluir que, en su caso no hay lugar a acceder a la pretensión de incrementos por personas a cargo, por haber desaparecido del ámbito jurídico la aplicación extensiva de la norma que los reguló, por tanto, se **confirmará** la sentencia conocida en consulta.

III. EXCEPCIONES

Se entienden implícitamente resueltas las excepciones formuladas por la demandada.

IV. COSTAS

No se causaron costas en esta instancia. La sentencia fue conocida en consulta.

V. DECISION DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 9 de octubre de 2019 proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por Guillermo León Valencia Arenas contra Colpensiones.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Se ordena **notificar** lo resuelto por estados y enviar copia de esta decisión al correo electrónico suministrado por los apoderados de las partes.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

Certifico que la anterior sentencia fue notificada por ESTADOS N° 74 fijados hoy 3 de mayo de 2021 a las 8:00AM

El secretario